

# Justicia por mano propia ante ausencia del Estado

EDITORIAL (<http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/>)    may 18, 2015

Paraguay es uno de los países que más aprueban la justicia por mano propia, según el Barómetro de las Américas 2014 de Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés) que realizó aproximadamente 50.000 entrevistas, en 27 países de América del Norte, Centro y Sur, y varios países del Caribe. Según el estudio, los países que más apoyan estas acciones son República Dominicana, Paraguay, Perú y Honduras, en tanto que aquellos que más las rechazan son Trinidad y Tobago, Brasil, Panamá y Guyana.

Todo aspecto de la realidad que se pretende negar u ocultar termina por reaparecer de la peor manera. Es lo que ocurre con el creciente drama de la inseguridad. Los lamentables y repudiables episodios en los que ciudadanos toman justicia por mano propia al golpear y, en algunos casos, terminar asesinando a presuntos delincuentes es una consecuencia directa del absoluto fracaso del gobierno nacional en la lucha contra el delito.

El Estado se retiró de las calles cediéndoselas a los delincuentes. Librados a sí mismos, desconfiando de instituciones como una policía ineficiente y a veces cómplice del delito, y una Justicia lenta y obligada a aplicar normas condescendientes con quienes delinquen, algunos ciudadanos quieren reemplazar a esas instituciones sin advertir que, al hacerlo, se convierten en aquello que procuran combatir.

Hablábamos de fracaso del Gobierno en la lucha con el delito, pero también puede ponerse en duda ese fracaso, pues la impresión que deja la actitud de las autoridades nacionales ante la creciente ola delictiva es más la de una indiferencia patológica que termina imprimiéndole un mayor impulso a esa ola.

La indiferencia constante en lo que hace a enfrentar el delito se ha manifestado en la permanente improvisación ante la falta de una política de Estado clara y adecuada. La narcopolítica, el azote de la droga ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una realidad cotidiana en todas las latitudes de nuestro suelo, adquiriendo en varias zonas características que nos recuerdan las pesadillas que sufrió Colombia y hoy sufre México. Así, hemos visto bandas de narcotraficantes que actúan impunes en sus

zonas de influencia y que tienen de “empleados” a jueces, fiscales y policías.

La ciudadanía observa, entonces, que parece existir una vía libre para robar al amparo del poder político, y que lo mismo ocurre en las calles, al amparo de la deserción de un Estado que no cumple con su obligación básica de brindar seguridad. En ambos niveles, la impunidad inyecta más combustible en la despiadada maquinaria del delito.

Es lógica, entonces, la sensación de indefensión que padecen los ciudadanos. Pero de ningún modo se puede permitir que algunos de ellos quieran hacer justicia por mano propia. Lo que jamás podemos hacer como sociedad es consentir o justificar estos hechos tan graves como inadmisibles.

Si el Gobierno no reacciona y sigue optando por permitir el reinado del delito, la sociedad no puede convertirse en su cómplice. La sociedad no puede delinquir para enfrentar la delincuencia.